

WIPHALAS POR EL MUNDO - 13.6.26

ALERTA INTERNACIONAL : AMENAZA AL ESTADO DE DERECHO EN BOLIVIA

Llamado Urgente a la Acción y la Solidaridad Política Europea

I. DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

Denunciamos ante la comunidad internacional la grave crisis política, social y de derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia bajo el gobierno de Rodrigo Paz.

Movilizaciones pacíficas de pueblos indígenas, comunidades campesinas, trabajadores, mineros, maestros y sindicatos están siendo enfrentadas con represión estatal, militarización y violencia racista. El pueblo boliviano no genera desorden; defiende sus derechos constitucionales, su soberanía alimentaria y su dignidad frente a un violento ajuste neoliberal.

II. ANTECEDENTES: ¿POR QUÉ SE MOVILIZA EL PUEBLO?

La crisis actual es el resultado directo de reformas impulsadas por el Ejecutivo que vulneran la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 y tratados internacionales ratificados por el país:

- **Leyes de Privilegio:** Legislación mediante decretos que benefician exclusivamente a las élites agroindustriales, destacando el D.S. 5547 (arancel cero para importación de soya) y la Ley 1718 (eliminación del impuesto a las grandes fortunas).
- **Ataque a la Soberanía (D.S. 5503):** Decreto —abrogado por la presión popular— que pretendía ceder recursos estratégicos a intereses extranjeros, vulnerando de forma flagrante el Convenio 169 de la OIT al suprimir el derecho vinculante
- **Despojo de Tierras Campesinas (Ley 1720):** Impulsada por intereses latifundistas, esta ley busca levantar la protección de la pequeña propiedad campesina para permitir que los grandes terratenientes la compren.

La legitimidad de la respuesta social: Este intento de despojo territorial provocó una histórica marcha indígena de más de 500 kilómetros que durante 27 días ascendió desde las tierras bajas de Pando y Beni hasta La Paz.

Esta movilización consolidó un bloque unitario con las organizaciones matrices del país: la Central Obrera Boliviana (COB), la CSUTCB, el Magisterio Urbano y Rural, y 39 centrales agrarias regionales. La única respuesta del Ejecutivo ha sido el cierre del diálogo y la estigmatización.

III. FACTORES DE RIESGO INMINENTE: EL QUIEBRE DEL ESTADO DE DERECHO

Alertamos a las instituciones europeas sobre cuatro factores de riesgo inminente:

- 1. Quiebre del Estado de Derecho:** Se abrogó la Ley 1341 sobre Estados de Excepción (26 de mayo). Con esto se eliminaron los límites constitucionales a la fuerza estatal, abriendo el camino a una militarización permanente e impunidad represiva. En cambio una nueva ley más laxa (Ley 1740) ha sido aprobada el 8 de junio. Esta ley presume legalidad en los actos de la policía y las fuerzas armadas (Art. 26), extiende a 90 días el Estado de Excepción y permite violaciones de derechos como detenciones injustificadas e incautación de bienes.
- 2. Violencia Racista Institucional:** Denunciamos el alarmante aumento de discursos de odio y estigmatización incluso desde el discurso oficial, así como la quema de la Wiphala (símbolo patrio constitucional) por grupos en defensa del gobierno. Estos actos reviven la dolorosa memoria del golpe de Estado de 2019, que dejó decenas de asesinados y miles de heridos.
- 3. Criminalización de la Protesta:** Se está utilizando la detención arbitraria y la violación del fuero sindical para descabezar y judicializar a los movimientos sociales. Se han detenido al menos 100 personas y alrededor de 50 heridos. Denunciamos particularmente la detención irregular de ocho dirigentes de la COB con policías vestidos de civiles y encapuchados. También se reportó violencia y abuso durante la detención de estos mismos dirigentes, aunque fueron liberados después debido a la ausencia de cargos. Ayer 10 de mayo se detuvieron más dirigentes campesinos (Fed. Tupac Katari y de los Ponchos Rojos).
- 4. Represión policial y apoyo explícito a grupos paramilitares.** Varios puntos de bloqueo y marchas han sido intervenidos. En San Julián una intervención policial junto con un grupo paramilitar armado (La Unión Juvenil Cruceñista, grupo denunciado en el informe del GIEI de la CIDH) dejó dos muertos y un presunto intento de violación.

IV. PETICIONES CONCRETAS PARA LIDERES Y SINDICATOS EUROPEOS

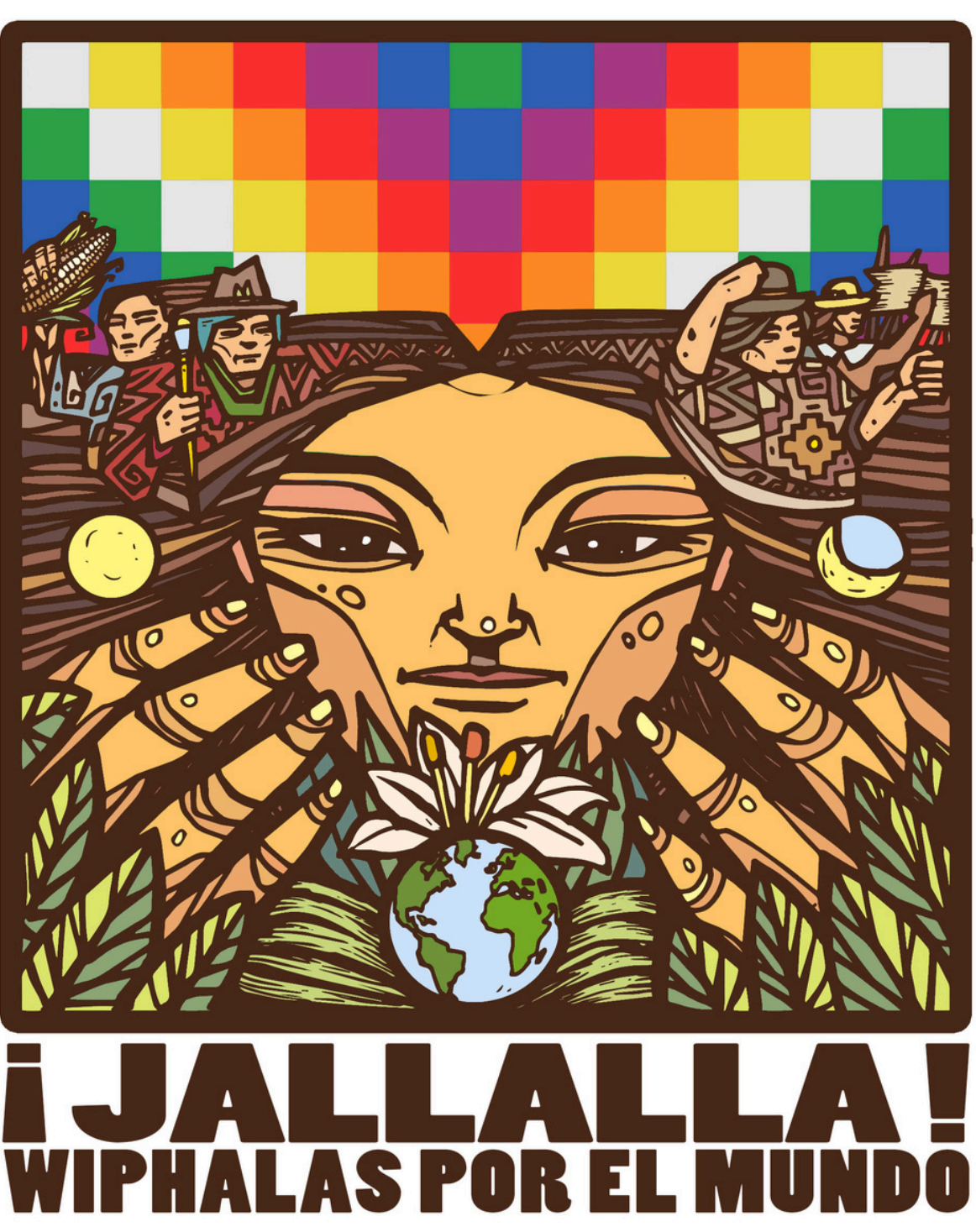
Exhortamos a los líderes e instituciones influyentes en Europa a romper el silencio y emitir PRONUNCIAMIENTOS PÚBLICOS e INTERPELACIONES OFICIALES para exigir:

- **Cese inmediato de la violencia estatal** y la represión militar y policial y de grupos paramilitares contra las manifestaciones pacíficas.
- **Rechazo a la nueva Ley 1840 sobre Estados de Excepción**, que no garantiza el respeto estricto a las salvaguardas constitucionales frente a los Estados de Excepción.

- **Liberación inmediata de todos los detenidos** en las protestas y respeto absoluto al fuero sindical y al derecho a la huelga.
- **Embargo y suspensión del envío de material militar o de control de disturbios** desde gobiernos extranjeros que pueda ser utilizado contra el pueblo civil.
- **Respeto a la soberanía nacional de Bolivia**, rechazando la injerencia extranjera y la privatización de los recursos públicos.

La solidaridad internacional ha sido históricamente un escudo fundamental para los pueblos de América Latina frente al autoritarismo. Les instamos a utilizar sus canales parlamentarios, redes públicas y herramientas diplomáticas para emitir declaraciones contundentes que protejan las vidas, los derechos conquistados y la democracia comunitaria en Bolivia.

¡Jallalla el Estado Plurinacional de Bolivia!
Coordinación Internacional Wiphaldas por el Mundo



WIPHALAS POR EL MUNDO - 13.6.26 INTERNATIONAL ALERT: THREAT TO THE RULE OF LAW IN BOLIVIA

Urgent Call for Action and European Political Solidarity

I. DECLARATION OF EMERGENCY

We denounce before the international community the grave political, social and human rights crisis unfolding in the Plurinational State of Bolivia under the government of Rodrigo Paz.

Peaceful mobilisations by Indigenous peoples, campesino communities, workers, miners, teachers and trade unions are being met with state repression, militarisation and racist violence. The Bolivian people are not creating disorder; they are defending their constitutional rights, food sovereignty and dignity in the face of a harsh neoliberal agenda.

II. BACKGROUND: WHY ARE THE PEOPLE MOBILISING?

The current crisis is not an isolated event. It is the legitimate response of civil society to reforms that flagrantly violate the 2009 Constitution.

- **Laws Benefiting the Oligarchy** The government has introduced decrees and legislation that primarily benefit large agro-industrial and economic elites, including Supreme Decree 5547 (zero tariffs on soybean imports) and Law 1718 (elimination of the wealth tax on large fortunes).
- **Attack on Sovereignty (Supreme Decree 5503)** This decree – subsequently repealed following public pressure – sought to transfer strategic resources to foreign interests (Article 8), undermine the powers of the Legislative Assembly (Articles 10 and 11), and abolish the requirement for prior consultation with Indigenous peoples (Article 12).
- **Dispossession of Campesino Lands (Law 1720)** Promoted by large landowning interests, this legislation seeks to remove protections for small-scale campesino landholdings, opening the way for their acquisition by major landowners.

The Legitimacy of the Social Response This attempt at territorial dispossession triggered a historic Indigenous march of more than 500 kilometres, which over 27 days travelled from the lowland regions of Pando and Beni to La Paz.

The mobilisation brought together the country's principal social organisations, including the Central Obrera Boliviana (COB), the Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia

(CSUTCB), urban and rural teachers' unions, and 39 regional agrarian federations. The government's response has been limited to closing channels of dialogue and stigmatising social movements.

III. CRITICAL INDICATORS OF A BREAKDOWN IN THE RULE OF LAW

We urge European political representatives to pay close attention to four imminent risk factors:

1. Erosion of the Rule of Law

Law 1341 on States of Emergency was repealed on 26 May. This removed important constitutional limitations on the use of state force, creating conditions for permanent militarisation and greater impunity.

A new and more permissive framework, Law 1740, was approved on 8 June. The law presumes the legality of actions taken by police and armed forces personnel (Article 26), extends States of Emergency to up to 90 days, and permits measures that may result in violations of fundamental rights, including arbitrary detention and property seizures.

2. Institutional Racist Violence

We denounce the alarming increase in hate speech and stigmatisation, including rhetoric originating from official discourse. We are also deeply concerned by the burning of the Wiphala – a constitutionally recognised national symbol – by groups supporting the government.

These acts revive painful memories of the 2019 political crisis, which resulted in dozens of deaths and thousands of injuries.

3. Criminalisation of Protest

Arbitrary detention and violations of trade union protections are being used to weaken and judicialise social movements.

At least 100 people have reportedly been detained and approximately 50 injured. We are particularly concerned by the irregular detention of eight COB leaders by plain-clothed and masked police officers. Reports also indicate violence and abuse during their detention, although they were later released due to the absence of charges.

On 10 June, further campesino leaders, including representatives of the Tupac Katari Federation and the Ponchos Rojos movement, were reportedly detained.

4. Police Repression and Support for Paramilitary Groups

Numerous roadblocks and protest sites have been forcibly dispersed.

In San Julián, a police intervention carried out alongside an armed paramilitary group – the Unión Juvenil Cruceñista, which has been referenced in the report of the Interdisciplinary Group of Independent Experts established by the Inter-American Commission on Human Rights – reportedly resulted in two deaths and an alleged attempted rape.

IV. SPECIFIC REQUESTS FOR EUROPEAN PUBLIC STATEMENTS

We call upon political leaders, individuals and institutions across Europe to break issue urgent public statements demanding that the Bolivian government:

- Immediately end state violence, military repression, police abuses and attacks by paramilitary groups against peaceful demonstrators.
- Reject Law 1740 on States of Emergency, which fails to provide adequate constitutional safeguards and protections for fundamental rights.
- Raise concern regarding the potential declaration of a State of Emergency. The new legislation expands the scope for repression and increases impunity.
- Secure the immediate release of all individuals detained in connection with the protests and fully respect trade union immunity and the right to strike.
- Suspend and embargo the transfer of military equipment and crowd-control materials that could be used against the civilian population.
- Respect Bolivia's national sovereignty and reject both foreign interference and the privatisation of public resources.

International solidarity has historically served as a vital shield for the peoples of Latin America in the face of authoritarianism.

We urge parliamentarians, trade unions, human rights organisations, political parties and civil society to use their parliamentary channels, public platforms and diplomatic mechanisms to issue strong statements in defence of life, human rights, democratic participation and the constitutional rights the Bolivian people has won through decades of struggle.

Jallalla the Plurinational State of Bolivia!

International Coordination – Wiphaldas por el Mundo